



***DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN***  
***TRIBUNAL SUPERIOR SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL***  
***MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA***  
***"Al servicio de la justicia***  
***y de la paz social"***

**S - 44**

**Procedimiento:** Anulación de laudo arbitral

**Convocante:** Juan José Cañas Restrepo

**Convocada:** Corporación Cultural Altavista

**Radicado Único Nacional:** 05001 22 03 000 2023 00649 00

**Procedencia:** Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

**Decisión:** Declara infundado recurso de anulación

Medellín, ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

**Cuestión:** Se resuelve recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto oportunamente por la parte convocada, en contra de la providencia proferida por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 25 de agosto de 2023.

**Temas:** Causal 7ª de anulación -artículo 41 de la Ley 1563 de 2012-, laudos en derecho y en equidad.

**ANTECEDENTES – lo pretendido y lo resuelto -**

En el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en trámite presidido por un solo árbitro, se profirió el laudo fechado el 25 de agosto de 2023, a través del cual se desataron las pretensiones formuladas por Juan José Cañas Restrepo en contra de la Corporación Cultural Altavista. Los pedimentos formulados fueron los siguientes:

**"PRIMERA:** *Que declare que la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA incumplió el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el señor JUAN JOSÉ CAÑAS el día 22 de febrero del 2022, en especial las cláusula décima y décimo primera.*

**SEGUNDA:** *Que, como consecuencia de lo anterior, se rescinda el contrato y se condene a la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA al pago de la indemnización por lucro cesante de los honorarios que percibía el señor JUAN JOSÉ CAÑAS por el incumplimiento contractual de la CORPORACIÓN, esto es la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$15.333.333), que equivalen a 3 meses y 2 días de honorarios.*

**TERCERO:** *Que se condene en costas del proceso y agencias en derecho a la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA."* (escrito de demanda).

Todo lo antedicho, con fundamento en hechos que así se compendian:

Que el Distrito de Medellín contrató directamente a la Corporación demandada para gestionar el proyecto denominado "*fortalecimiento de los procesos organizativos de los clubes juveniles*", para lo cual conformó un equipo de 21 personas con diferentes perfiles, entre ellos, el demandante, quien fue contratado

*"como profesional en historia, y con experiencia en coordinación, sistematización, planeación y evaluación de proyectos sociales, vía contrato de prestación de servicios profesionales, ... como el Coordinador General de Operación Técnica y Financiera; su contrato se pactó con vigencia del 22 de febrero del 2022 al 2 de noviembre del 2022, cuyos honorarios totales se pactaron en \$41.166.667, con pagos de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) mensuales, pagaderos los días 30 de cada mes"*

Que el demandante debía encargarse de la coordinación técnica, administrativa, jurídica y financiera del proyecto, teniendo en cuenta el vínculo contractual entre la Corporación Cultural Altavista y la Secretaría de la Juventud, así como las demás propias del contrato que cumplió con éxito. Sin embargo, el jueves 4 de agosto de 2022 recibió un mensaje en el que se le citaba a una reunión urgente, misma que tuvo lugar *"con el señor JOHN EDWAR y el señor JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO"* (sic hecho séptimo demanda).

Que en esa reunión, en resumen, le indicaron que debía dejar sus funciones de inmediato y para ello se requería de su renuncia voluntaria. Empero, el demandante no aceptó y envió una petición proponiendo como solución del conflicto que le fueran pagados \$15.000.000 correspondientes a los últimos 3 meses de presupuesto, pero no recibió ninguna respuesta y, por el contrario, la Corporación cambió la clave de acceso al correo que normalmente usaba, incumpliendo así *"las obligaciones contractuales que contrajo con el señor CAÑAS, dispuestas en la Cláusula tercera: (E)n virtud del presente contrato EL CONTRATANTE se obliga a proveer AL CONTRATISTA la información digital y/o física necesaria para la realización del servicio"*.

Que a pesar del absoluto silencio guardado por la Corporación, el 1º de septiembre de 2022 le fue notificada la terminación unilateral del contrato, de la siguiente manera:

*"el señor JUAN DAVID MONSALVE se comunica vía email con el señor CAÑAS para notificarle la terminación unilateral del contrato por incumplimiento, argumentando que:*

*usted incurrió en un grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales, toda vez que a partir del 04 de agosto de 2022 usted tenía a su cargo las siguientes responsabilidades, las cuales no ejecutó:*

- Consolidación del tercer informe bimensual correspondiente al mes de junio y julio de 2022, el cual debió entregarse la primera semana de agosto.*
- Enviar cronograma semanal a la secretaría de la juventud.*
- Realizar el acompañamiento y direccionamiento al equipo de trabajo en la planeación y ejecución del segundo intercambio de experiencias realizado el 26 de agosto y de todas las actividades programadas en el mismo mes.*
- Asistir a las reuniones de planeación de las actividades del segundo intercambio realizadas en el marco de la semana de la juventud*
- Coordinar y realizar las reuniones del equipo de trabajo.*
- Asistir a las mesas técnicas realizadas por la secretaría de la juventud.*
- Enviar información a la secretaría de la juventud.*
- Seguimiento al trabajo en territorio del equipo dinamizador.*
- Acompañamiento y direccionamiento en la feria de emprendimiento en Alianza con el Aeropuerto Olaya Herrera.*

- *Seguimiento al plan de trabajo y plan operativo en cumplimiento a las actividades que comprende el contrato.*

- *Planeación del intercambio.”*

El Tribunal de arbitramento, además de los asuntos administrativos propios de su funcionamiento, resolvió así:

*"PRIMERO: Declarar que la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA incumplió el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con el señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO el día 22 de febrero de 2022, por las razones expresadas en la parte motiva de este laudo.*

*SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar la terminación por incumplimiento de la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado el día 22 de febrero de 2022 con el señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO, por las razones expresadas en la parte motiva de este laudo.*

*TERCERO: Condenar a la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA a pagar a favor del señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO, la suma de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$15.333.333).*

*Dicha suma de dinero deberá ser debidamente indexada por parte de la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA desde la fecha en que se debió producir cada pago mensual a favor del señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO hasta el día en que se produzca el pago total de la obligación reclamada, conforme a lo expuesto en la parte motiva del laudo, esto es, de la siguiente manera:*

- Desde el día 30 de agosto de 2022 hasta la fecha en que se proceda al pago total de la obligación, se deberá indexar la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000).

- Desde el día 30 de septiembre de 2022 hasta la fecha en que se proceda al pago total de la obligación, se deberá indexar la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000).

- Desde el día 30 de octubre de 2022 hasta la fecha en que se proceda al pago total de la obligación, se deberá indexar la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000).

- Desde el día 2 de noviembre de 2022 hasta la fecha en que se proceda al pago total de la obligación, se deberá indexar la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$333.333).

*CUARTO: Condenar a la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA a pagar a favor del señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO, la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 4.498.667) por concepto de costas y agencias en derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este laudo”.*

Para decidir de esa manera, comenzó con un recuento detallado de los hechos y las excepciones, para luego decir que estaban reunidos los presupuestos procesales. Dicho eso, realizó algunas consideraciones sobre el pacto arbitral y se planteó como problemas jurídicos los consistentes en determinar "1. ¿Existió incumplimiento del contrato celebrado proveniente de la entidad demandada? 2. ¿Existió incumplimiento del contrato celebrado proveniente del demandante? 3. En caso de que haya existido o no incumplimiento del demandado ¿hay lugar a condenar a la compañía demandada al pago de una

*indemnización a favor de la parte demandante? O, por el contrario, ¿se está incurriendo en un cobro de lo no debido? 4. ¿Existe prescripción?”-*

De cara a resolver esos problemas acudió al análisis de las pruebas, partiendo de que el vínculo contractual entre las partes estaba acreditado, pero con respecto al supuesto incumplimiento la situación se complicaba porque de la reunión del 4 de agosto no quedó acta o grabación, de lo cual no se seguía necesariamente la negativa de las pretensiones y, todo lo contrario, debían concederse porque obraba prueba sobre la tesis de la demanda, así

*"A. Como se expresó en precedencia, de la reunión de fecha 4 de agosto de 2023, no existe ninguna evidencia documental.*

*B. En conversaciones por WhatsApp que se sostuvieron entre el demandante y el señor JOHN EDWAR FORONDA BECERRA, las cuales fueron aportadas al plenario en un formato distinto del que fueron generadas, por lo que debe darse aplicación al inciso segundo del artículo 247 del Código General del Proceso, se observa que el señor FORONDA BECERRA requiere mediante mensaje enviado el día 9 de agosto de 2022 al señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO para que le remita la "carta".*

*C. En la audiencia de testimonio en la que el señor JOHN EDWAR FORONDA BECERRA brindó su declaración, este indica que efectivamente le solicitó al demandante por WhatsApp la remisión de la carta de renuncia a lo que supuestamente se había comprometido el señor CAÑAS RESTREPO en la reunión del día 4 de agosto de 2023.*

*D. La ausencia de requerimientos efectuados por parte de la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA al señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO con posterioridad al día 4 de agosto de 2023, requiriéndolo por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.*

*E. Las pruebas testimoniales de los señores FERNEY VALENCIA ROJAS, LUISA FERNANDA MONTOYA y YAQUELINE QUINTERO son coincidentes en afirmar que los primeros días de agosto de 2022 (la testigo LUISA FERNANDA MONTOYA afirma que se enteró el día 9 de agosto de 2022) a ellos se les informó que el señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO no continuaba con el proyecto, pero tampoco se les indicó la razón de esa situación, señalándose que el lugar o posición del demandante en la ejecución del proyecto pasó a ser ocupada por DANIELA JARABA.*

*F. Las pruebas testimoniales de los señores FERNEY VALENCIA ROJAS y LUISA FERNANDA MONTOYA son coincidentes en afirmar que los primeros días de agosto de 2022, el demandante les remitió un mensaje por WhatsApp en el que les informó que no continuaba con la ejecución del proyecto ya que habían prescindido de sus servicios, comunicación en la que nunca manifestó haber renunciado a su cargo.*

*Dicha prueba testimonial se ve corroborada por el pantallazo de WhatsApp aportado con la demanda en donde el demandante envía un mensaje al grupo de trabajo del proyecto informando acerca de su desvinculación por decisión de la Corporación, mensaje que fue enviado el día 11 de agosto de 2022.*

*G. La remisión por parte del demandante a la entidad demandada de la carta de fecha 12 de agosto de 2022, en la cual busca que las partes alcancen un acuerdo para la terminación del contrato.*

*Dicha comunicación no tuvo respuesta como fue aceptada por la entidad demandada, manifestando tanto el señor JUAN DAVID MONSALVE, representante legal de la corporación y el señor JOHN EDWAR FORONDA que no se sentían obligados a negociar, ya que entendían que el demandante había renunciado verbalmente.*



*H. La reunión del día 11 de agosto de 2023 entre el demandante y el señor JOHN EDWAR FORONDA, la cual acepta el testigo tenía como propósito discutir lo acontecido en reunión del día 4 de agosto de 2023, en donde el demandante dice que buscaba lograr un acuerdo para continuar con el proyecto, así como manifestar su inconformidad por la petición de renuncia que se le estaba realizando y el testigo afirma que en dicha reunión el demandante se retractó de su renuncia.*

*I. La comunicación de fecha 1 de septiembre de 2022, en la cual la entidad demandada le remite la carta de terminación del contrato de prestación de servicios profesionales al señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO.*

*J. El pantallazo de fecha 22 de agosto de 2022 que evidencia que al señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO, se le había cambiado la clave de acceso al correo electrónico*

*K. Las declaraciones de los testigos FERNEY VALENCIA ROJAS y LUISA FERNANDA MONTTOYA quienes manifestaron que podían acceder al drive contentivo de la información y documentación del proyecto mediante su correo personal o institucional y que la contraseña no era cambiada periódicamente.*

*L. Los señores JOHN EDWAR FORONDA y JUAN DAVID MONSALVE, en sus respectivas declaraciones, afirman sobre la reunión del día 4 de agosto del 2022, que el señor JUAN JOSE CAÑAS RESTREPO en reunión previa "tuvo una alteración y tuvo algunas palabras fuertes con los jóvenes representantes de Medellín"; y que esta fue la causa de la renuncia, pero no refieren condiciones de tiempo, modo o lugar en que se presentó esa situación. Cabe anotar que la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA no aportó pruebas ni de la supuesta renuncia del demandante, ni de su actuar durante el mes de agosto de 2022.*

*M. Al cuestionarse al interior del interrogatorio de parte de que fue objeto el representante legal de la entidad demandada sobre quién presentó la queja relacionada con el altercado, evade dar respuesta directa al cuestionamiento.*

*Sin embargo, es importante destacar que en dos (2) ocasiones, el señor MONSALVE menciona un despido.*

*Citando textualmente sus palabras, el representante legal de la entidad convocada dice que: " (...) Es más, yo no, yo no despedí a Juan José por ese motivo", lo cual indica que acepta el despido.*

*Sin embargo, posteriormente reconsidera su afirmación y dice: "Es más, él fue, ya lo dije, el que me renunció. Y él fue el que abandonó el cargo." Sin embargo, inmediatamente después, vuelve a contradecirse y afirma: "Aquí yo no estoy diciendo que yo despedí a Juan José por ese motivo."*

*Dichas manifestaciones no pueden pasar por alto para el Tribunal quien tiene que entrar a valorarlas de manera conjunta con los demás medios de prueba recaudados dentro del proceso, tal como lo impone el artículo 176 del Código General del Proceso.*

*N. Otro argumento que prueba que el señor Cañas no renunció, sino que fue retirado del proyecto, se encuentra en la declaración de la testigo YAQUELINE QUINTERO, quien para la época de los hechos se encontraba trabajando para la Secretaría de la juventud, quien indica que a ella se le manifestó que el demandante no continuaba en el proyecto:*

*"sí en una reunión que yo estuve pues también se habló un poco como que Juan José no continuaba, estaban en una reunión como dos*

*personas de la Secretaría. Y pues solamente se nombró que Juan José no continuaba en el proceso”.*

*Así las cosas, si la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA dio por hecho que el demandante no continuaba ¿por qué le informan a la Secretaría de la Juventud lo contrario?*

*O. La Secretaría de la Juventud no envió requerimiento escrito, ni del comité técnico, no hay actas, ni llamados de atención al demandado por incumplimientos que pudieran ser imputados al demandante, ni se aportó medios de prueba por la parte demandada en tal sentido, en consecuencia, puede concluirse que la Secretaría de la Juventud.*

*P. La afirmación del testigo JOHN EDWAR FORONDA BECERRA en el sentido de que para él en su calidad de director de la corporación demandada era claro que el demandante no había renunciado y por ende, el contrato de prestación de servicios profesionales seguía vigente para el día 12 de agosto de 2023”*

De todo ello dijo extraer indicios tales como que fue la Corporación la que terminó el contrato de prestación de servicios de manera unilateral, pues designó a la señora Daniela Jaraba sin haber finiquitado la relación con el demandante y para no pagarle ninguna contraprestación *"procedió a ejecutar conductas para evitar que el demandante pudiera cumplir con sus obligaciones contractuales y de esta manera poder justificar una terminación contractual sin lugar a indemnización de ninguna índole”.*

## **DEL RECURSO DE ANULACIÓN**

En contra de la decisión que puso fin al trámite arbitral, el apoderado de la convocada interpuso recurso de anulación alegando la causal prevista en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es decir, *"Haberse fallado*

*en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo". Lo anterior, argumentando centralmente que "La litis a resolver por el Tribunal de Arbitramento consistía en determinar si el contrato de prestación de servicios suscrito por las partes fue válidamente terminado por mi representada, en razón al incumplimiento de las obligaciones allí pactadas por parte del demandante".*

Ese problema jurídico fue decidido de forma incorrecta, porque de la reunión que sostuvieron las partes el 4 de agosto de 2022 no quedó prueba alguna, por lo que el Tribunal basó su decisión en sendos indicios que no responden a la realidad, a saber:

*- "La terminación del contrato de prestación de servicios de este sucedió el 01 de septiembre de 2022, conforme a la carta de terminación que reposa en el plenario y que no fue tachada u objetada por la contraparte. De manera que el Tribunal dio por ciertos hechos sin estarlo, conforme a la realidad probatoria del plenario."*

*- la Corporación nunca requirió al demandante para que enviara su carta de renuncia, "inclusive así lo reconoció él en su interrogatorio de parte, realidad probatoria esta desconocida por el Tribunal. Ahora bien, el laudo impugnado se afínca en una supuesta impresión de conversación de WhatsApp, elemento este que no corresponde al mensaje de datos original como prueba electrónica en los términos de la ley 527 de 1999"*

*- la Corporación entendía que el contrato de prestación de servicios con el demandante no iba a ser renovado, y esa fue la razón para contratar a la señora Daniela Jaraba.*

*- el equipo de trabajo no fue enterado de que Juan José Cañas sería retirado del proyecto, por lo menos no con antelación a la terminación formal del contrato.*

- no es cierta la supuesta ejecución de maniobras para inducir la renuncia
- los dos indicios llamados cerrar acceso al correo electrónico y OneDrive

*"se caen por su propio peso, en la medida que como quedó acreditado en el interrogatorio de parte al demandante, este nunca se contactó con la Corporación para retomar sus actividades, las cuales estaban claramente trazadas y definidas en su contrato de prestación de servicios, y mas aún como contratista independiente y con plena autonomía, tenía la plena libertad de cumplirlas como mejor le pareciera. Sin embargo, y ello sí quedó probado, de él solo se recibió un elocuente silencio de abandono de sus responsabilidades, ante lo cual la Corporación tuvo que reaccionar como ya se dijera y permitirle el acceso de su información a la nueva coordinación del proyecto, hechos estos demostrados y acreditados pero que el laudo prefiere ignorar o pasar por alto"*

## **RÉPLICA**

Al recurso se impartió el trámite de rigor, y dentro del traslado otorgado el no recurrente solicitó que no fuera acogida la súplica de su contraparte, pues

*"el recurrente busca desvirtuar el fallo en derecho a través de una supuesta ausencia probatoria en relación con el entorpecimiento de las labores al señor Cañas, para ello acude a que el señor Cañas era contratista y conocía sus labores. En este punto, es claro que el demandante sabía cuáles eran sus funciones, no obstante, en el proceso se logró probar que la Corporación le quitó el acceso al drive cambiando la contraseña (prueba que no fue tachada por el recurrente); los testigos corroboraron que nunca se cambia la contraseña de manera periódica, argumento utilizado por la parte demandada, además, los mismos*

*testimonios, no uno, sino tres, afirmaron que la Corporación Cultural Altavista, la misma semana que le solicitaron renunciar al señor Cañas, les indicó a los trabajadores y/o contratistas, que el señor Cañas no continuaría, desmoronándose el argumento de que el señor Cañas podía realizar sus funciones con normalidad, además, el recurrente omite mencionar la mala fe de la Corporación Cultural Altavista al crear un escenario en que el señor Cañas no pudiese realizar sus labores, con la intención de terminar el contrato por supuesto incumplimiento, todo lo anterior debidamente probado, como se evidencia en el laudo de referencia.*

*En este argumento, el recurrente habla de recurso de impugnación y no de anulación, se entiende que se trata del de anulación por la estructura misma del escrito y la naturaleza del proceso, sin embargo, su lapsus denota la verdadera intención de su argumentación, el cual es que se analice de fondo una decisión que es de única instancia, acudiendo a una causal que no tiene fundamento y que por tanto, debe ser condenada en costas”(sic)*

Agotado el trámite correspondiente al recurso, la sala entra a resolver previas las siguientes,

## **CONSIDERACIONES**

### **1. De la naturaleza del recurso extraordinario de anulación**

La anulación del laudo arbitral, como recurso extraordinario que es, supone una limitación en sus alcances, y por lo mismo, un conocimiento restringido del litigio de fondo. No otra cosa se desprende del tenor literal del inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 -Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional-, según el cual "*la autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará*

*los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo". Incluso, el órgano de cierre de esta "jurisdicción" ha entendido desde tiempo atrás que:*

*"[...] por esta vía no es factible revisar las cuestiones de fondo que contengan el laudo ni menos aún las apreciaciones críticas, lógicas o históricas en que se funda en el campo de la prueba, sino que su cometido es el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral" (sent. Rev. 21 de Febrero de 1996). Su naturaleza jurídica especial, impide "que la cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser examinada por el Tribunal Superior que conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otras cosas, muy fácil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a este tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado las partes [...]"<sup>1</sup>*

En similar sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha ocupado en varias ocasiones de definir la naturaleza y alcance de este especial medio impugnativo, señalando las razones por la cuales se trata de un recurso extraordinario dado que:

*"(E)l juez que revisa el laudo objeto del recurso extraordinario de anulación no se constituye en segunda instancia del juez arbitral, en tanto que no es superior jerárquico de éste. b) Por lo mismo, el juez que conoce de este recurso extraordinario 'está impedido para juzgar el tema de fondo, para evaluar si la decisión tomada por los árbitros se ajusta al derecho sustancial o para cuestionar*

---

<sup>1</sup>Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. *Sentencia de 13 de agosto de 1998*. Además, sentencia del 8 de abril de 2011, rad. 2009-00125-00; reiterada en SC5208-2017 del 18 abril, ambas citadas en *Sentencia del 19 de octubre de 2020*. Radicado 11001-02-03-000-2017-03567-00. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

*la manera como el tribunal entendió y resolvió los problemas jurídicos que se le plantean'. c) El recurso de anulación por ser de naturaleza extraordinaria tiene por objeto la anulación o modificación de la decisión arbitral cuando contiene errores de procedimiento -in procedendo- y, excepcionalmente, errores sustanciales -in judicando-, lo cual conduce necesariamente a afirmar que no puede impugnarse un laudo en cuestiones de mérito o de fondo".<sup>2</sup>*

Ese conocimiento restringido resulta ser una típica característica de todo recurso extraordinario, pues su análisis no puede ir más allá de los lindes que el propio impugnante indique, ni de los alcances que la causal invocada posea, aun cuando en el laudo se adviertan yerros sustanciales en la definición de aquel litigio, habida cuenta que el recurso de anulación no es sinónimo ni se equipara al de apelación, tampoco constituye una segunda instancia, por lo que el Tribunal no es el superior funcional del colegio de árbitros. Tanto más se afirma lo dicho cuando se considera que el arbitraje, por su propia esencia, es un proceso de única instancia -porque a eso renunciaron las partes cuando decidieron voluntariamente someter sus diferencias al conocimiento de este equivalente jurisdiccional-.

## **2. Del fallo en equidad- causal 7ª de anulación -**

En esta materia, como suele suceder igualmente en el procedimiento civil ordinario, se impone la taxatividad de las causales de anulación que pueden proponerse. Al respecto, el numeral 7º del artículo 41 de la ley 1563 de 2012 prescribe que "(S)on causales del recurso de anulación: (...) Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo".

---

<sup>2</sup>Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 19 de junio 2000, rad. 16724.



En este punto resulta pertinente apuntar que la equidad es un concepto jurídico indeterminado, normalmente relacionado al principio de justicia entendido como el arte de vivir honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo (en el marco de la máxima de Ulpiano). Su expresión jurídica concreta ha sido explicada por la Corte Constitucional así:

*"La equidad ha sido objeto de análisis por las decisiones de este Tribunal destacando (i) que se trata de un concepto jurídico indeterminado objeto de constitucionalización; (ii) que su reconocimiento se constata en diferentes disposiciones de la Carta que aluden a ella (art. 20, 95 226, 230, 267 y 363); y (iii) que la equidad en materia de administración de justicia tiene su lugar "en los espacios dejados por el legislador" al paso que "su función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto"*<sup>3</sup>

Es por ello que para llevar el concepto de manera concreta al campo de la justicia arbitral, y más específicamente al terreno de la anulación de los laudos, debe considerarse que

*"(...) El fallo en conciencia, para que configure la causal de anulación del laudo, exige que "esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo" –art. 163.6, Decreto 1818 de 1998-, de modo que en virtud de este requisito el legislador impuso una exigencia superlativa para valorarlo. Por esta razón, identificarlo no debería imponer mayores esfuerzos intelectuales, porque la ley exige que la circunstancia sea manifiesta, lo que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa –según la acepción apropiada a este contexto-: ". adj. Descubierta, patente, claro", de manera que un laudo en conciencia debe ser evidente, es decir, no admitir duda sobre su carácter. Si el laudo ofrece dudas respecto a su calidad no puede calificarse como*

---

<sup>3</sup> Corte Constitucional. *Sentencia C-284 de 2015*. M.P. Mauricio González Cuervo.

*dictado en conciencia. La Sala ya ha destacado esta nota, porque "De la simple lectura de la norma transcrita emerge que la causal se estructura cuando se presenta la circunstancia de haber fallado en conciencia y este hecho resulta patente en el laudo, esto es, sin que se requiera de mayores argumentaciones para demostrar ese acontecimiento pues es ostensible." – Sección Tercera, Subsección C, sentencia de marzo 24 de 2011. Exp. 38.484- (...)"*.

*"(...) En estos términos, la ley procesal establece una especie de presunción, por cuya virtud ha de entenderse que un laudo se dicta en derecho, pero si la parte lo pone duda debe recurrir para demostrar lo contrario, cuya apreciación exige un análisis simple. Si el estudio que se requiere es complejo, si la calificación admite dudas o debates, no es posible calificar la providencia como laudo en conciencia, porque el legislador exige una evidencia protuberante del vicio, que lo haga indiscutible. Esta Sección ya lo ha destacado -sentencia del 20 de junio de 2002, exp. 20.129-: "Para que se configure la causal segunda de anulación del laudo prevista en el art. 72 de la ley 80 de 1993 es necesario que la separación de los árbitros de la aplicación de las reglas de derecho 'aparezca manifiesta en el laudo', y en el que se examina no se evidencia tal despropósito de los árbitros (...)"*.

*"(...) Este requisito dista en demasía de lo que estableció el legislador para las demás causales de anulación, donde la omisión de una condición semejante significa que esta Corporación debe auscultar intensamente la eventual configuración del vicio que se alega, lo que amerita estudios exhaustivos de sus elementos constitutivos. Por ejemplo, si la causal es por fallo extemporáneo, inevitablemente se revisarán las providencias que influyeron en el término para dictarlo, sin que se admita un estudio somero, general o que eluda la valoración completa de los documentos que indican en la causal. Lo propio aplica al vicio por fallo extrapetita, cuya valoración exige ponderar la*

*demanda, su contestación –con las pretensiones y excepciones- y el laudo, para concretar con mucho rigor técnico si se incurrió o no en él (...)"*.

*"(...) Por el contrario, si la norma estableciera que estos dos vicios se configuran sólo si es manifiesta su materialización, no cabe duda que la ponderación cambiaría, porque la intensidad de la apreciación variaría sustancialmente. En el caso concreto, la acreditación del laudo en conciencia no impone -ni puede hacerlo- un estudio profundo y detallado de carácter normativo o probatorio, sino uno externo y más superficial, sin que sea incompleto, que acredite que el laudo se dictó en conciencia sin mayores intervenciones conceptuales de fondo. Esta técnica de control al laudo, a través de esta causal, protege una elección que las partes del contrato hicieron cuando prefirieron la justicia alternativa a la natural: la decisión de única instancia. En estos términos, un laudo se dicta en conciencia cuando a prima facie, sin mayores esfuerzos de comprensión jurídica, se descubre que la decisión no se fundamenta en las normas y en el razonamiento jurídico en general, sino en la convicción íntima del juez, con independencia de las directrices y determinaciones que provienen del sistema jurídico (...)"*.

*"(...) Según lo expuesto, para que un laudo se considere proferido en conciencia debe omitir la referencia al régimen jurídico aplicable a la controversia. En este sentido, expresó la sentencia de 27 de abril de 1999: "Por consiguiente, si en el laudo se hace la más mínima referencia al derecho entendido en su más amplia acepción (normas de derecho positivo, principios generales, doctrina constitucional, o, jurisprudencia) es calificable como 'en derecho' y no en conciencia. "El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico; toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propia conciencia, basado o no en el*

*principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada (...)"*.

*"(...)"*

*"(...) En este orden de ideas, para que un fallo sea considerado en conciencia, se exige que su contenido no se haya apoyado en el derecho objetivo que regula la controversia, y que por tanto sea producto de la libre apreciación del juez, sin consideración alguna a las normas del ordenamiento jurídico, además de que el aspecto probatorio debe guardar armonía con esta idea, en tanto que el sentido de la decisión debe ser expresión de las pruebas que obran en el proceso, y su valoración según las reglas de la sana crítica (...)"<sup>4</sup>.*

De modo que se está ante una de aquellas causales de anulación que debe saltar a la vista de la simple comparación entre las consideraciones del laudo y el derecho vigente, pero de ninguna manera puede servir para encubrir opiniones diversas o impugnaciones que, como se sabe, no caben en contra de las decisiones tomadas por la justicia arbitral en el marco del pacto previamente aceptado por las partes.

## **CASO CONCRETO**

Consciente el Tribunal de que está convocado en sede de un recurso extraordinario como el de anulación, se dispone a abordar el caso concreto teniendo en cuenta que no es labor que aquí competa la consistente en *"comprobar que la decisión del árbitro único corresponda a la solución más adecuada del conflicto"*<sup>5</sup>. Dicho esto, está claro que la recurrente se queja de

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 11001-03-26-000-2013-00111-00(48117), citada en sentencia STC14794 del 30 de octubre de 2019. Radicado 11001-22-03-000-2019-01621-01. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. *Sentencia del 20 de octubre de 2020*. Op.Cit.

que el árbitro supuestamente se pronunció en equidad, lo cual no puede estar más alejado de la realidad.

Son así las cosas, porque la totalidad de las disertaciones del recurrente no son más que críticas de lo resuelto a modo de recurso, aunque la teoría de la equidad le sirvió de fórmula abierta o vacía para verter allí sus inconformidades. Lo anterior, porque el árbitro realizó un juicioso análisis de la situación a través de indicios que dedujo de una serie de mensajes cruzados por las partes vía chat de mensajería instantánea y correos electrónicos, amén de las demás pruebas practicadas. Nótese que el administrador transitorio de justicia comenzó su valoración concreta del caso aclarando que *"debe entrar el Tribunal Arbitral a construir indicios con fundamento en la prueba recaudada, tal como lo permiten los artículos 240 a 242 del Código General del Proceso"*.

Es más, fue enfático en que las tomas de pantalla o los formatos impresos de las conversaciones de Whatsapp las valoraría en la forma autorizada por el inciso segundo del artículo 247 del C.G.P, esto es, *"de conformidad con las reglas generales de los documentos"*. De ahí en más, lo que se observa es una resaltable construcción de la solución del caso a través de hechos probados e indicados y, claro, con explicación de por qué en algunos eventos los segundos se inferían de los primeros a través de un proceso mental indiciario.

Por ejemplo, el árbitro estimó probado que al demandante, después de pedirle la "carta" para poner fin a la relación contractual, y este se negara a firmarla, le fue impedido el acceso al correo electrónico corporativo y el OneDrive que almacenaba la información de trabajo. También, se contrató a la señora Daniela Jaraba para que cumpliera las labores otrora por él desempeñadas y, según los testimonios, el equipo de trabajo fue enterado de que el señor Cañas no seguiría vinculado al proyecto. De esos hechos probados, el árbitro dedujo una práctica perversa orientada a provocar la renuncia del actor.

Esos no son razonamientos en equidad, por el contrario, adecuados o no, son trabajos indiciarios que partieron de la fuerza demostrativa de los medios de prueba, en especial los documentales y testimoniales, debido a que de los primeros medios se conocieron diversas tomas de pantalla de mensajería instantánea a los que se les dio el tratamiento propio de la prueba indiciaria, conforme lo determinó la Corte Constitucional en sentencia T-043 de 2020, en punto a que:

*"los avances tecnológicos que a nivel global se han dado en distintos campos (ciencia, medicina, aplicativos digitales), también han influido en el entendimiento y el ejercicio del derecho. Al efecto, en el ámbito probatorio, por ejemplo, los operadores judiciales diariamente deben analizar elementos extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se cuente con metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la información o solo capturas de pantallas respecto de ciertas afirmaciones o negaciones realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre estas últimas, la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba"*

Por citar apenas otro ejemplo de que el laudo no encarna de manera alguna una decisión en equidad, el árbitro citó el testimonio del señor JOHN EDWAR FORONDA BECERRA, quien declaró que a su juicio el contrato de prestación de servicios estaba vigente después del 4 de agosto de 2022 porque el demandante no había renunciado, para de ahí inferir que

*"(L)a reunión del día 11 de agosto de 2023 entre el demandante y el señor JOHN EDWAR FORONDA, la cual acepta el testigo tenía como propósito discutir lo acontecido en reunión del día 4 de agosto de 2023, en donde el demandante dice que buscaba lograr un acuerdo para continuar con el proyecto, así como manifestar su inconformidad por la*

*petición de renuncia que se le estaba realizando y el testigo afirma que en dicha reunión el demandante se retractó de su renuncia”*

Nótese que esa es ya una conclusión sugerida por la prueba testimonial misma, que no movida o sustentada en la equidad y tampoco un indicio, debido a que aplicando la sana crítica a esa declaración el fallador extrajo ciertas conclusiones para apoyar su decisión, como debe hacerse cuando se falla en derecho y está de más en materia de equidad.

Entonces, siendo las cosas como se acaban de plantear, y estando claro que no es tarea del Tribunal entrar en el estudio de la impugnación cubierta con el manto del recurso de anulación, basta con reiterar que en el laudo se observa la solución de un problema jurídico concreto a través de la aplicación de normas sustanciales y procesales. Cosa diferente es que a nivel probatorio el administrador transitorio optó por inferencias que no favorecen los intereses de la recurrente, lo cual no convierte la providencia automáticamente en una de aquellas proferidas en equidad.

## **DECISIÓN**

Sin más consideraciones, la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO** el recurso de anulación de laudo arbitral interpuesto oportunamente por la parte convocada, en contra de la providencia proferida por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 25 de agosto de 2023.

**SEGUNDO: CONDENAR** en costas a la recurrente a favor del no recurrente. Ejecutoriada la presente providencia el expediente ingresará al Despacho para la fijación de las agencias en derecho.

**TERCERO: ORDENAR** de la devolución del expediente a su origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**  
**MAGISTRADA**

**BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA**  
**MAGISTRADO**

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO**  
**MAGISTRADO**

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria  
Magistrada  
Sala 002 Civil  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia



**Julian Valencia Castaño**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 010 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Benjamin De Jesus Yepes Puerta**  
**Magistrado**  
**Sala Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **518398f2f3d6d383faa8bbece2cbb22f329a1cdd1ac0d1886d179c1acf66195f**

Documento generado en 08/03/2024 09:24:05 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**